REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

Purificación, nueve (09) de diciembre de dos mil veintidós (2022).

PROCESO : TUTELA

ACCIONANTE : **WILSON VASQUEZ AVILA**

ACCIONADO : DATT del Tolima, y otro

RADICADO : 73-585-40-89-001-2022-00150-00 (6779)

Procede el Despacho a decidir de fondo la acción de tutela interpuesta por **WILSON VASQUEZ AVILA** actuando en nombre propio, contra el Departamento Administrativo y Tránsito y Transporte del Tolima (DATT) y el vinculado Departamento Administrativo Tránsito y Transporte del Tolima sede Operativa Purificación, por la presunta violación a los derechos fundamental de petición.

A N T E C E D E N T E S

La solicitud:

Expone el accionante **WILSON VASQUEZ AVILA**, en su escrito de tutela, los siguientes hechos:

1.-Que el día 19 de octubre de 2022 presento derecho de petición a SECRETARIA DE MOVILIDAD DEL TOLIMA, solicitando la prescripción de la multa de transito No. 99999999000003802814 con resolución No. 1826.

2.- Que a la fecha han transcurrido más de un mes y aún no ha recibido respuesta por parte de la entidad accionada.

3-Que con el actuar de la accionada considera vulnerado sus derechos fundamentales de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política de 1991, y el derecho a la información consagrado en el artículo 20

PRETENSIONES:

1.-Se reconozca su derecho fundamental de petición al cual tiene derecho en virtud del artículo 23 de la Constitución Política de Colombia.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

2. que se le dé respuesta de manera clara, congruente y de fondo, desde el numeral primero en el orden en el cual presento la petición.

TRAMITE PROCESAL

Mediante auto de fecha 29 de noviembre del presen año, este despacho avocó el conocimiento de la acción de tutela, concediéndole a la accionada un término de dos (02) días para que ejerciera su derecho de defensa, vinculándose al Departamento Administrativo Tránsito y Transporte del Tolima sede Operativa Purificación - Tolima.

RESPUESTA DE LA VINCULADA.

GINETH MELISSA BONILLA FLORIAN, NOHORA LUCERO ALDANA profesional Universitaria de la sede Operativa de Transito de Purificación Tolima, dentro del término concedido da respuesta a la tutela indicando que por los fundamentos de hecho y de derecho por las cuales se fundamenta la presente tutela, esta no debe prosperar en contra de la sede Operativa de Transito de Purificación, por cuanto revisado el sistema en el que se radican todas las peticiones que los diferentes usuarios elevan ante la Sede Operativa de Transito de Purificación Tolima, no se avizora derecho de petición radicado por el accionante, en su sede; y que referente al tema de prescripción la competencia la tiene el Departamento Administrativo de Transito del Tolima - DATT

RESPUESTA DE LA ACCIONADA

CARLOS ALBERTO BARRERO PRADA, director del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Tolima, en respuesta a la presente acción de tutela, indica que el derecho de petición del accionante fue radicado el día 10/10/2022 y contestado el 01/12/2022, mediante oficio No.3411, donde se le indico al peticionario que no se concedía el fenómeno de la prescripción del comparendo No.99999999000003802814 del 23/05/2018, Resolución sanción No.73585000-247 dl 10/07/2018, y M.P.1826 del 10/07/2018, perteneciente a la sede Purificación (polca), explicándole que la mora en la respuesta se debió a que a diario se reciben

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

sendas solicitudes que deben contestarse perentoriamente en su orden y registro de llegada, tal como lo establece el artículo 15 de la Ley 962 de 2005 que trata sobre –Derecho de turno–, siendo claro que no hay actuación dilatoria injustificada de la entidad de Transito Departamental, relacionada con el no querer atender la misma, que estando el derecho de petición ya resuelto, en los términos de la Sentencia T-988/02 de la Honorable Corte Constitucional, la acción de tutela pierde eficacia por estarse ya ante un hecho superado por carencia actual de objeto.

Que lo pretendido por el señor WILSON VASQUEZ, no es procedente ya que es un proceso que se encuentra actualmente en estado “Cobro Coactivo” donde se adelantó a través de un procedimiento especial regulado en la Ley 769 de 2002, con todas sus modificaciones, con un valor total a cancelar de \$781.230,00, según reporte del Simit a la fecha 02 de diciembre de 2022.

Que siguiendo las reglas del Código Nacional de Tránsito, en atención a que el contraventor WILSON VASQUEZ, no se hizo presente a la audiencia, se dio aplicación al artículo 136 del código en mención, que indica: “...si el contraventor no comparece sin justa causa comprobada en este tiempo, la autoridad de transito dentro de los diez (10) días siguientes seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificado en estrados”

Así las cosas, que bajo el entendido el accionante no compareció ante la autoridad competente de Tránsito y Transporte, es decir, ante el Organismo de Transito de Purificación- Tolima, por la época de los hechos, esta dio trámite normal al proceso y profirió la resolución sanción anteriormente mencionada, la cual se entiende será notificada en estrados, para lo cual en ese caso no sería aplicable el artículo 72 de la Ley 1437 de 2011, que el accionante menciona en su relato, en razón a que nos encontramos frente a un procedimiento especial regulado en la Ley 769 de 2002, con todas sus modificaciones, por lo que se evidencia que el procedimiento se hizo conforme al artículo 161 de la referida ley, que indica: “La acción o contravención de las normas de tránsito caduca a los seis (6) meses, contados a partir de la ocurrencia de los hechos que dieron origen a ella y se interrumpe con la celebración efectiva de la audiencia.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

Que con fundamento en dicha norma se evidencia que el organismo de tránsito de Alvarado, actuó de manera correcta pues emitió la Resolución Sanción No.73585000-247 del 10/07/2018, es decir, que la imposición de la multa de tránsito no ha operado el fenómeno jurídico de la caducidad ni de la prescripción, en ninguno de los dos casos, pues se evidencia que se suspendió al emitir Sanción por el funcionario competente para la época de los hechos.

Que no existe motivo alguno para que el accionante mencione que la resolución sanción no se le notificó en debida forma, pues como ya se mencionó en el acápite de hechos y pretensiones, el procedimiento contravencional es un proceso administrativo especial regulado en el Código Nacional de Tránsito, el cual, permite acorde con los artículos 136 y 139 del mismo, realizar la notificación de la resolución sanción en estrados cuando el contraventor sin justa causa comprobada no se hace presente a la audiencia, por lo cual el señor WILSON VASQUEZ, fue notificado en debida forma, además, realizó una infracción codificada en su momento con el código (D01), por lo que no le asiste razón al accionante al manifestar que el proceso contravencional iniciado conforme a la orden de comparendo anteriormente mencionado, se encuentran viciada de nulidad, dado que dicho comparendo se encuentra en el área de “Cobro Coactivo” donde se le emitió auto de mandamiento de pago.

Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 159 de la Ley 769 de 2002, las sanciones impuestas por infracciones a las normas de tránsito prescriben en tres (3) años, contados a partir de la ocurrencia del hecho, es decir, que desde la emisión de la resolución sanción la administración contaba con tres (3) años para emitir mandamiento de pago y notificarlo, es decir, que dichos términos se suspendieron en la fecha de emisión del mandamiento de pago.

Que la acción de tutela es improcedente para aniquilar actos administrativos, máxime cuando el accionante tiene otros mecanismos jurídicos para la defensa de sus intereses, teniendo en cuenta que puede presentar excepciones al mandamiento de pago, acorde con los postulados del Estatuto Tributario; por lo que estando debidamente citado el

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

contraventor de las normas de tránsito a través del comparendo, es su derecho y deber estar presto al ejercicio de su defensa y por ende asumir los efectos de su inasistencia a la misma.

Que es obligación del incumplido comparecer y ejercer todos los medios de defensa que tiene derecho, mediante la intervención procesal o interposición de recursos en el proceso administrativo sancionatorio.

PETICION ESPECIAL:

Se declare improcedente la presente acción de tutela dado a que no se le está vulnerando ningún derecho un fundamental, ni se le esa poniendo en riesgo ninguno de sus derechos, tal y como lo constata la Honorable Corte Constitucional, en donde manifiesta que las acciones de tutela son improcedentes cuando resulten derechos amenazados o vulnerados con ocasión de la expedición de actos administrativos, cabe anotar que en el caso que nos ocupa, la información le está siendo dada de manera clara y completa al señor WILSON VASQUEZ, por parte de ese departamento.

PROBLEMA JURIDICO

Ha de establecer el despacho, si la accionada Departamento Administrativo Transito Transporte del Tolima (DATT), y el vinculado Departamento Administrativo Tránsito y Transporte del Tolima sede Operativa Purificación, vulneraron el derecho fundamental de petición al accionante, como consecuencia de no dar respuesta a su derecho de petición, relacionado con la información y copias solicitadas.

COMPETENCIA

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1°. Del decreto 33 de 2021, que Modificó el artículo 2.2.3.1.2.1 del Decreto 1069 de 2015, las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden **departamental**, distrital o **municipal** y contra particulares serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia, a los Jueces Municipales.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

Por lo anterior, este despacho es competente para conocer de esta acción constitucional.

CONSIDERACIONES

De la legitimación

a. Por activa

El art. 86 de la constitución nacional faculta a cualquier persona para promover acción de tutela contra una autoridad pública o un particular en los Casos permitidos por la ley, cuando se amenacen o vulneren derechos fundamentales.

En el presente caso el accionante actuando en nombre propio se encuentra legitimado para incoar la presente acción de tutela, en aras de proteger su derecho fundamental de petición.

b. Por pasiva

La legitimación pasiva en la acción de tutela hace referencia a la aptitud legal de la entidad contra quien se dirige la acción, de ser efectivamente la llamada a responder por la vulneración o amenaza del derecho fundamental.

El artículo 1 del decreto 2591 de 1991 determina que “Toda persona tendrá acción de tutela para reclamar ante los jueces, en todo momento y lugar, mediante un procedimiento preferente y sumario, por sí misma o por quien actúe a su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando quiera que éstos resulten vulnerados o amenazados por la acción o la omisión de cualquier **autoridad pública**” (Resaltado fuera de texto)

En este caso, la accionada: Departamento Administrativo Transito Transporte del Tolima (DATT), y la vinculada: sede Operativa Purificación del Departamento Administrativo Tránsito y Transporte del Tolima, son autoridades públicas que se encuentran legitimadas por pasiva para ser demandadas en esta acción constitucional.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

Determinada la legitimación por activa y por pasiva, debe examinarse los presupuestos de **inmediatez y subsidiaridad**. En reiteradas oportunidades la jurisprudencia ha sido clara en señalar que la procedencia de la acción de tutela se encuentra sujeta al cumplimiento del requisito de inmediatez.

Al respecto, ha precisado que la protección de los derechos fundamentales, vía acción constitucional, debe invocarse en un plazo razonable y oportuno, ello en procura del principio de seguridad jurídica y la preservación de la naturaleza propia de la acción de amparo.

Sobre el particular, la Corte Constitucional ha determinado que si bien es cierto la acción de tutela no tiene un término de caducidad, esto no debe entenderse como una facultad para presentar la misma en cualquier tiempo. Lo anterior, por cuanto a la luz del artículo 86 Superior el amparo constitucional tiene por objeto la protección inmediata del derecho invocado.

En este caso, entre los hechos relatados como violatorios de los derechos fundamentales de la accionante y la acción de tutela transcurrió un plazo razonable. En efecto, la petición la realizó el accionante el día 19/10/2022, y la acción de tutela fue presentada el 29 de noviembre de 2022, cumpliéndose el presupuesto de inmediatez.

De otra parte, de conformidad con lo previsto en el artículo 86 de la Constitución Política la acción de tutela es de naturaleza residual y subsidiaria y, en consecuencia, su procedencia se encuentra condicionada a que el afectado no disponga de otro medio de defensa judicial, o existiéndolo, éste no resulte lo suficientemente idóneo y eficaz para la defensa del derecho invocado, circunstancia en la cual, se habilita el uso del amparo constitucional como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

En este caso no se evidencia que el accionante disponga de otro medio de defensa judicial. La corte Constitucional ha reiterado que: *“la acción de tutela es el mecanismo procedente para determinar la violación del derecho de petición. En esa dirección, la sentencia T-084 de 2015 sostuvo que “la tutela es un mecanismo idóneo para proteger el derecho de petición de los*

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

administrados, toda vez que por medio del mismo se accede a muchos otros derechos Constitucionales”. De acuerdo con lo anterior, la Corte ha estimado “que el 5 ordenamiento jurídico colombiano no tiene previsto un medio de defensa judicial idóneo ni eficaz diferente de la acción de tutela, de modo que quien resulte afectado por la vulneración a este derecho fundamental no dispone de ningún mecanismo ordinario de naturaleza judicial que le permita efectivizar el mismo”. (Sentencia T-206/18).

DE LOS DERECHOS INVOCADOS

El accionante invocó como presuntamente violado, el derecho fundamental de petición.

Del derecho de petición

El artículo 23 de la Carta Superior, consagra: “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución”. Como consecuencia del desarrollo jurisprudencial del derecho de petición, se sintetizó las reglas para su protección, en los siguientes términos: “a) El derecho de petición es fundamental y determinante para la efectividad de los mecanismos de la democracia participativa. Además, porque mediante él se garantizan otros derechos constitucionales, como los derechos a la información, a la participación política y a la libertad de expresión. b) El núcleo esencial del derecho de petición reside en la resolución pronta y oportuna de la cuestión, pues de nada serviría la posibilidad de dirigirse a la autoridad si ésta no resuelve o se reserva para sí el sentido de lo decidido. c) La respuesta debe cumplir con estos requisitos: 1. oportunidad 2. Debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado 3. Ser puesta en conocimiento del peticionario. Si no se cumple con estos requisitos se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición. d) Por lo anterior, la respuesta no implica aceptación de lo solicitado ni tampoco se concreta siempre en una respuesta escrita. e) Este derecho, por regla general, se aplica a entidades estatales, esto es, a quienes ejercen autoridad. Pero, la Constitución lo extendió a las organizaciones privadas cuando la ley así lo determine. f) La Corte ha considerado que cuando el derecho de petición se formula ante particulares, es necesario

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

separar tres situaciones: 1. Cuando el particular presta un servicio público o cuando realiza funciones de autoridad. El derecho de petición opera igual como si se dirigiera contra la administración. 2. Cuando el derecho de petición se constituye en un medio para obtener la efectividad de otro derecho fundamental, puede protegerse de manera inmediata. 3. Pero, si la tutela se dirige contra particulares que no actúan como autoridad, este será un derecho fundamental solamente cuando el Legislador lo reglamente. g). *En relación con la oportunidad de la respuesta, esto es, con el término que tiene la administración para resolver las peticiones formuladas, por regla general, se acude al artículo 6° del Código Contencioso Administrativo que señala 15 días para resolver. De no ser posible, antes de que se cumpla con el término allí dispuesto y ante la imposibilidad de dar una respuesta en dicho lapso, la autoridad o el particular deberá explicar los motivos y señalar el término en el cual se realizará la contestación. Para este efecto, el criterio de razonabilidad del término será determinante, puesto que deberá tenerse en cuenta el grado de dificultad o la complejidad de la solicitud. Cabe anotar que la Corte Constitucional ha confirmado las decisiones de los jueces de instancia que ordena responder dentro del término de 15 días, en caso de no hacerlo, la respuesta será ordenada por el juez, dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes.* h) La figura del silencio administrativo no libera a la administración de la obligación de resolver oportunamente la petición, pues su objeto es distinto.

El silencio administrativo es la prueba incontrovertible de que se ha violado el derecho de petición. i) El derecho de petición también es aplicable en la vía gubernativa, por ser ésta una expresión más del derecho consagrado en el artículo 23 de la Carta. Sentencias T- 294 de 1997 y T-457 de 1994.” Igualmente, el decreto legislativo No. 491 del día 28 de marzo de 2020

Del caso en concreto:

El vinculado Departamento Administrativo Tránsito y Transporte del Tolima sede Operativa Purificación, a través de la profesional universitaria GINETH MELISSA BONILLA FORIAN, informa en respuesta a la tutela, que ante esa oficina no aparece radicado derecho de petición que hubiere presentado el accionante WILSON VASQUEZ AVILA, y que referente a temas de prescripción la competencia la tiene el departamento administrativo

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCO MUNICIPAL

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

transito del Tolima DATT, solicitándole al juzgado desvincular de la presente acción de tutela a la Sede Operativa de Transito de Purificación – Tolima, por lo anteriormente expuesto.

Por su parte el Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte del Tolima –DATT- a través de su director CARLOS ALBERTO BARRERO PRADA, con relación al derecho de petición presentado por el accionante WILSON VASQUEZ AVILA, acepta haberlo recibido el día 20/10/2022 y dado respuesta el 01/12/2022 por oficio 3411 a través del correo electrónico abogadosasociados21501@gmail.com al que le adjuntan la Resolución No.1770 de 11/30/2022, donde niegan la prescripción del comparendo aludido en su petición, y en el Ordinal “**TERCERO**” de la parte resolutive, le hacen saber al accionante que contra la resolución procede únicamente el recurso de reposición el que deberá interponerse por escrito en la diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella.

En consecuencia, el despacho advierte que, si bien es cierto el derecho de petición solo le fue contestado en el curso de esta acción constitucional, la respuesta cumple con los requisitos para entender satisfecho el derecho fundamental, por cuanto la respuesta fue de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado, enviada al accionante al correo electrónico dado para efectos de notificaciones.

Al cumplirse estos requisitos por parte de la accionada, esta Juez Constitucional, considera que existe carencia actual de objeto por hecho superado, por cuanto, tal y como lo ha dicho de manera reiterada la Jurisprudencia Constitucional, si entre el momento de interposición de la acción de tutela y el fallo, se evidencia que, como consecuencia del obrar de la accionada, se superó o cesó la vulneración de derechos fundamentales alegada por el accionante, resulta inocua cualquier intervención del juez constitucional en aras de proteger derecho fundamental alguno, pues ya la accionada los ha garantizado.

Puestas, así las cosas, el Despacho procederá a no tutelar los derechos fundamentales de Petición, invocado por el accionante.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO PRIMERO PROMISCOU MUNICIPAL

Palacio de justicia - Piso 3°

j01prmpalpurificacion@cendoj.ramajudicial.gov.co

En mérito de lo anteriormente considerado el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de Purificación Tolima, administrando Justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la Ley,

R E S U E L V E

PRIMERO: NO TUTELAR el derecho fundamental de petición, del accionante WILSON VASQUEZ AVILA quien actúa en causa propia, conforme lo expuesto en la parte motiva del presente fallo.

SEGUNDO: NOTIFICAR la presente decisión a las partes atendiendo a lo establecido en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

TERCERO: REMITIR el expediente a H. Corte Constitucional para su eventual revisión de no ser impugnada.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.

La Juez,

Firmado Por:

Gabriela Aragon Barreto

Juez

Juzgado Municipal

Juzgado 001 Promiscuo Municipal

Purificacion - Tolima

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **13119552dda02d1f14720a4ad4002422aa65cc3d21b2088ca3e77206b19eb34d**

Documento generado en 09/12/2022 03:46:00 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>